



Cámara Federal de Casación Penal

Registro nro.: 1244/2025

///la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, se reúnen los señores jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal doctores Carlos Alberto Mahiques, Mariano Hernán Borinsky y Guillermo J. Yacobucci, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por el Secretario Actuante, para resolver en la causa **CFP 17459/2018/TO1/100/CFC23** del registro de esta Sala, caratulada: **"Plo, María Jesús y otros s/recurso de casación"**. Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Mario Alberto Villar; mientras que los el doctor José Luis Fernández asiste técnicamente a Miguel Ángel Plo y la defensa oficial representa a María Jesús Plo y Federico Zupicich.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: doctor Mariano Hernán Borinsky, doctor Carlos Alberto Mahiques y doctor Guillermo Yacobucci.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor **juez Mariano Hernán Borinsky** dijo:

PRIMERO

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro 7 de esta Ciudad, con fecha 30 de junio de 2025, resolvió, en lo que aquí interesa: **"NO HACER LUGAR** al planteo de falta de acción formulado por la defensa de



María Jesús Plo y Federico Zupicich a la que adhirieron las defensas de Miguel Ángel Plo, Federico Zupicich, Carlos Adolfo Gellert, Carlos Temístocles Cortez, Rubén Horacio Llaneza, Leonardo Daniel Llaneza y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy, sin costas".

De esta manera, se rechazó la pretensión de apartar de su rol de querellante a la UIF por falta de legitimación en las presentes actuaciones.

II. Contra dicha decisión, interpusieron recurso de casación la defensa oficial de María Jesús Plo y Federico Zupicich y la defensa particular de Miguel Angel Plo, los que fueron denegados por el *a quo* y luego concedidos por la vía directa (Reg. 955/25 y 956/25, ambas del 9 de septiembre de 2025).

En esta instancia se presentaron el doctor Cristian Pérez por la defensa particular de Carlos Gellert y el doctor Julián Subías por la defensa de Carlos Temiscoles Cortéz, adhiriendo a los recursos concedidos.

III. Descripción de los agravios.

Recurso de casación de la defensa oficial de María Jesús Plo y Federico Zupicich.

En su impugnación la defensa comenzó diciendo que no existe en estas actuaciones una acto procesal que haya tenido a la UIF como parte querellante, en los términos de los artículos 83 y 84 del CPPN, alegando que su intervención fue convalidada "de hecho" por resultar este legajo un desprendimiento de la causa nro 9608/2018.

Consideró así que se vulneró "...el principio de legalidad procesal, al tratarse la querella de un instituto de admisión excepcional, formal y expresa"; a





Cámara Federal de Casación Penal

la par que el tribunal omitió dar respuesta a los planteos de la defensa en torno a "...la imposibilidad de ejercer control y confrontar la supuesta constitución de la UIF como querellante" como así también del cercenamiento de la facultad de recurrir la decisión de legitimar a esa parte.

Dijo que ha existido "...un absoluto desconocimiento de la naturaleza autónoma de este proceso respecto de las causas de las que se pretende extrapolar la intervención de la UIF como querellante, a la vez que se omitió responder a nuestras advertencias sobre que la legitimación procesal obtenida en un expediente no se transfiere automáticamente".

Expuso que se vulneró el principio acusatorio "...al habilitar una duplicación ilegítima de la acusación estatal (Fiscalía y UIF), sin sustento legal, quebrando el equilibrio procesal y ampliando indebidamente el poder punitivo estatal".

Señaló que la resolución recurrida tergiversó el planteo de la defensa y puso el ejemplo de lo sucedido con la Oficina Anticorrupción -que no tuvo que desistir del rol y no interviene más en el proceso- para demostrar que la calidad de querellante no se traspasa de un expediente a otro. Agregó que aquí estamos frente a un proceso independiente, con imputados diferentes y hechos distintos y por ello es irrelevante que la UIF sea



querellante en la causa 9608 si en estas actuaciones nunca fue tenida por parte. Alegó entonces que lo actuado por el organismo en el presente legajo no resulta válido.

Criticó el voto del juez Castelli, indicando que *"asigna valor constitutivo a actos como notificaciones, participación en recursos o presentación de pruebas"*, pero ello *"no se ajusta a los requisitos legales de admisión como querellante; sino que, no son más que el producto del mismo procedimiento viciado, equívoco y apartado de la ley"*.

Luego, efectuó una serie de críticas al trámite de la causa, particularmente al obrar del juez instructor y la manera en que se formaron los distintos legajos, todo lo cual consideró ilegítimo.

Finalmente, añadió que incluso a partir de la sanción del decreto 274/2025 *"la Unidad de Información Financiera ha perdido la posibilidad de constituirse como querellante"*.

En suma, consideró a la decisión arbitraria, infundada, lesiva del derecho de defensa y el debido proceso.

Hizo reserva del caso federal.

Recurso de casación de la defensa particular de Miguel Angel Plo.

El recurrente encauzó sus agravios en ambos incisos del artículo 456 del CPPN.

Tras replicar los escritos incorporados al legajo, comenzó diciendo que *"la simple lectura de la resolución recurrida y su cotejo con el muy fundado planteo realizado por la Defensa Oficial de María Jesús Plo y Federico Carlos Zupicich, así como en la adhesión*





Cámara Federal de Casación Penal

con ampliación argumental de esta parte; pone en evidencia que el tribunal no cumplió con el deber de fundamentación que le exige el art. 123 del CPPN, y que hace a la garantía constitucional de razonabilidad de los actos de gobierno".

Expresó que el fallo "[t]ampoco dio tratamiento alguno a las argumentaciones dirimientes expuestas -además con copiosas citas jurisprudenciales y doctrinarias-; omitiendo así por completo cumplir con el tratamiento y respuesta jurisdiccional a los que tenemos derecho, por lo que los planteos y argumentos que expusimos mantienen plena vigencia para el presente recurso".

Señaló que "...el tribunal parte de reconocer que es exigencia legal que la constitución de querellante se concrete como lo mandan los arts. 83 y 84 del CPPN"; sin embargo "...en contradicción con lo que así dice, (...) también reconoció que en esta causa n° 17459/2018 no hay ningún escrito que la UIF hubiera presentado para constituirse en querellante; y por tanto, igualmente admitió que no hay decreto ni auto fundados que hayan constituido a ese organismo en parte querellante", lo que determina la existencia de una nulidad "de orden general".

Concretamente, indicó que "en esta causa n° 17.459/2018 la UIF no se constituyó legalmente en querellante" y que el tribunal por vía interpretativa



recurrió al rol que ese organismo asumiera en los expedientes 9608/2018 y 3867/2016, ello a fin de "... validar las inaceptables omisiones e irregularidades acaecidas en esta causa"; vulnerándose con esta interpretación extensiva, el principio "pro homine y pro persona".

Refirió que "...el tribunal mismo da cuenta de que en la causa n° 9608/2018 se investiga el delito precedente, y en la presente causa el lavado de activos de aquel otro; es decir, dos quehaceres y configuraciones diferentes, relacionados y conexos pero diferentes entre sí"

En ese marco, alegó que "la circunstancia de que esta causa se haya formado con actuaciones de un legajo de investigación de la causa n° 9608/2018, no implica que resulte ser una suerte de incidente de ésta"; es decir, que son causas "autónomas".

Apuntó que "... [cuando] el juez Bonadio decidió que el legajo de investigación de la causa 'madre' n° 9608/2018 había 'gestado' actuaciones que debían 'crecer' como causa 'autónoma'; lo que hizo fue independizar los trámites procesales iniciando un proceso penal nuevo por un supuesto delictivo distinto al investigado en la citada causa n° 9608/2018...".

Agregó que "[l]a condición de querellante no se traslada sin más de un proceso a otro; esa es una interpretación completamente extraña y ajena a nuestro sistema legal, carente de fundamento normativo (el simple repaso de los arts. 82 a 86 lo demuestra sobradamente) y por tanto inadmisibile".





Cámara Federal de Casación Penal

Hizo un recuento de las actuaciones conexas y dijo que "...esta causa n° 17.459/2018 fue 'gestada' por el juez Bonadío como una causa 'melliza' de la n° 3867/2016 cuya competencia le estaba siendo negada", comenzando así un "camino de completa ilegalidad que se siguió en este proceso que se pretende convalidar; y que torna aún más importante que se entiendan las múltiples y reiteradas violaciones al debido proceso y a la defensa en juicio, entre ellas que la UIF nunca se presentó para constituirse en parte querellante en esta causa". Consideró inválido lo actuado por el organismo.

Finalmente, hizo también alusión al nuevo decreto 274/2025.

En suma, consideró que la resolución que rechazó el apartamiento de la UIF era arbitraria, carecía de fundamentos y debía ser anulada.

Hizo reserva del caso federal.

IV. Presentaron breves notas, el defensor particular de Miguel Angel Pló, la defensa oficial de María Jesús Plo y Federico Zupicich y la defensa particular de Carlos Gellert, quienes solicitaron se haga lugar a los planteos.

Por su parte, en representación de la Unidad de Información Financiera, se presentó el doctor Mariano Ariel Galperín con el patrocinio letrado de Laura Alicia Taboada, y por los fundamentos expuestos en su escrito -a



los que cabe remitirse por razones de brevedad-
peticionaron que se rechace la falta de acción y las
nulidades invocadas por los defensores.

Superada la etapa prevista en el art. 465 bis
del C.P.P.N., las actuaciones quedaron en estado de ser
resueltas.

SEGUNDO

1. Para una mejor comprensión del caso,
efectuaré un somero recuento de lo actuado en el presente
legajo.

Esta incidencia tuvo su génesis a partir del
pedido de falta de acción formulado por la asistencia
técnica de María Jesús Plo y Federico Zupicich, al que
adhiere la defensa particular de Miguel Ángel Plo.

Concretamente postularon la falta de
legitimación para actuar como querellante de la UIF,
alegando en sustancia que el referido organismo nunca fue
tenido por parte en estas actuaciones, que no hay un
decreto que así lo haya ordenado y que en consecuencia se
inobservaron los artículos que rigen la materia (83 y 84
del CPPN). Asimismo, plantearon que la circunstancia de
que haya sido tenida por parte en otros legajos, no
autoriza a considerarla querellante automáticamente en
este proceso; lo que importaría además la invalidez de lo
actuado por el organismo.

Por otra parte, y de manera subsidiaria,
aludieron al reciente decreto 274/2025 del Poder
Ejecutivo Nacional que derogó la facultad de querellar de
la UIF.

El Tribunal de grado rechazó la pretensión de
la defensa.





Cámara Federal de Casación Penal

Para así decidir, el sentenciante comenzó por repasar el derrotero de las causas mencionadas por las defensas y cuál fue el rol que allí se asignara a la Unidad de Información Financiera.

Así, se explicó que "...el día 8 de agosto de 2018, el juez a cargo de la instrucción ordenó, en el marco de la causa N° 9608/2018, la formación de un legajo de investigación a raíz de distintos informes acompañados por la Unidad de Información Financiera que correspondían a la causa CFP 3867/2016, tras entender que su contenido podría estar vinculado con los hechos investigados en esa causa. En aquella (3867/2016), se investigaba a Héctor Daniel Muñoz (quien había sido Secretario Privado de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner), Carolina Pochetti, Elba Diamantina Ortiz Municoy y Sergio Esteban Todisco, entre otros, por la constitución de sociedades en el extranjero mediante las cuales, según se sospechaba, se aplicó dinero en operaciones financieras e inmobiliarias que excedían un mero incremento patrimonial injustificado".

Se expuso que "...la formación del legajo de investigación aparte obedecía a la necesidad de investigar a estas personas que no estaban consideradas como integrantes de la asociación ilícita que se investigaba en la causa 9608/2018, para determinar si el dinero presuntamente obtenido ilícitamente a partir de



los delitos allí investigados había sido canalizado en bienes subrogados en el extranjero con el propósito de cortar todo lazo con los hechos ilícitos pesquisados”.

Se aclaró que “[e]se legajo de investigación que se inició como un desprendimiento de la causa N° 9608/2018, formó una nueva causa por orden del magistrado del 11 de octubre de 2018, por cuestiones de economía procesal y para no entorpecer el curso de la causa principal (ver decreto de fojas 845), pero, antes de que ello ocurriera (el 13 de septiembre de 2018), en el marco de la causa principal (fs. 8968/8978) la Unidad de Información Financiera solicitó ser tenida por parte querellante”.

En ese contexto, se detalló que “el 19 de septiembre de 2018, el entonces titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 tuvo al citado organismo como parte querellante en esa causa ‘madre’, por entender que su pretensión se ajustaba a los requisitos establecidos por el art. 82 y siguientes del C.P.P.N.”.

Se añadió que incluso “[e]sta decisión fue confirmada el 23 de octubre de 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal (ver incidente 9608/2018/177)”, oportunidad en donde se dijo -entre otros argumentos- que “...la facultad de la Unidad de Información Financiera para intervenir como parte querellante comprende la actuación tanto en causas en las que se esté analizando la posible comisión del delito de lavado de activos, como también en las que se investiguen sus ilícitos precedentes y/o maniobras que pudieren encontrarse vinculadas a aquél”.





Cámara Federal de Casación Penal

Detalló también el tribunal que "...el sumario que se había desprendido del principal terminó por convertirse en una causa autónoma que recibió el N° 17459/2018 y tuvo, como objetivo principal, investigar posibles maniobras de lavado del dinero presuntamente obtenido a partir de las hipotéticas actividades ilícitas pesquisadas en la causa 9608/2018".

Realizado este detalle, y yendo concretamente a la respuesta de la excepción deducida, el tribunal apuntó que "los argumentos relativos a la ausencia de constitución formal de la UIF como parte querellante en este expediente, no se condicen con las constancias de la causa".

En ese orden, dijo el a quo que de la compulsa de las actuaciones "...surge que tanto el organismo como el magistrado a cargo de la instrucción entendieron siempre que cumplía el rol de querellante, dándole intervención como parte en el sistema -fs. 5599-, notificándola del procesamiento, participando la UIF del legajo de apelación formado como consecuencia, y ofreciendo medidas de prueba para impulsar el proceso -fs. 6336/41-.".

Se expuso que además "[se] le corrió al organismo la vista del artículo 346 del CPPN, formulando la UIF el requerimiento de elevación a juicio, que, junto con el producido por la Fiscalía, sienta las bases sobre las que se realizará el juicio oral y público"; a lo que



cabía añadir que "...muchas de las defensas, si bien han impugnado dichas piezas procesales, nada han dicho del asunto en trato".

Apuntó el a quo asimismo que "...la UIF había quedado habilitada para actuar como querellante en el expediente principal (9608/2018) donde se investigaba la existencia de una asociación ilícita presuntamente destinada a lograr la percepción ilícita de millonarias sumas de dinero en beneficio de sus integrantes (delito precedente), y del que se desprendió el legajo de investigación que posteriormente formó esta causa, donde se investigaron presuntas maniobras de lavado del dinero aparentemente obtenido a partir de las hipotéticas actividades allí pesquisadas".

A mayor abundamiento, se explicó que "...durante la tramitación del expediente 3867/2016... (en el que... se investigaba el mismo objeto procesal que en esta causa) el organismo solicitó también expresamente actuar como tal. Ello ocurrió a fojas 427/433, con un escrito por el cual su entonces titular plasmó in extenso las razones por las cuales el organismo contaba con legitimación procesal e interés legítimo para querellar el expediente, en razón de que se investigaba la presunta comisión del delito de lavado de activos, las que fueron consideradas por el magistrado que entonces llevaba la causa haciendo lugar a lo solicitado el 3 de octubre de 2016".

En esa coyuntura, se concluyó que "...ante la unificación de ambos expedientes que investigaban los mismos sucesos (el 5/11/18), las partes que allí intervenían pasaran a incorporarse, necesariamente, en





Cámara Federal de Casación Penal

esta"; lo que reafirmaba, a criterio del a quo, la legitimación de la UIF en estas actuaciones.

Superado ello, el tribunal se dedicó a dar respuesta a la cuestión vinculada con el decreto 274/2025 que derogara el artículo que autorizaba a la UIF a querellar.

Sobre el particular, se remitió a lo dicho en el expediente 1614/2016, el pasado 2 de junio, replicando los siguientes argumentos: *"De la lectura del decreto no puede inferirse el efecto que peticionan las defensas. Es que la norma en cuestión no hace alusión alguna al destino de aquellas causas en trámite en las que la UIF ya interviene como querellante, circunstancia que, como ocurre en este expediente, involucra procesos con años de trámite y etapas avanzadas. De allí que, ante la falta de previsión normativa expresa, corresponda, por vía de la interpretación, desentrañar su finalidad y la voluntad del órgano emisor. Pues bien, a criterio del Tribunal, existen razones fácticas que permiten una exégesis clara del espíritu de la norma, en favor de que la UIF continúe como querellante en este proceso. En efecto, los mismos apoderados del organismo son los que, encarnando la voluntad de su presidente, entienden que el decreto del PEN no les prohíbe continuar con su rol de querellante en esta causa, y manifiestan su interés en continuar tal actividad, destacando la cantidad de recursos del*



organismo que fueron necesarios para llegar al debate oral y público. Esta posición no es aislada ni circunstancial. En el expediente CFP 17459/2018/T01 de trámite ante esta misma sede, el titular a la UIF, designado por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, Dr. Paulo Starc, manifestó su interés en continuar con la querella, alegando razones de seguridad jurídica y preclusión procesal, y destacando que el Decreto N° 274/2025 no establece una prohibición para continuar en aquellas causas en las que el organismo ya haya adquirido tal calidad. Asimismo, en un recurso de queja recientemente presentado ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico (no resuelto a la fecha), el Dr. Starc aseveró que no fue intención del Poder Ejecutivo desplazar a la UIF de las causas en las que ya querella, razón por la cual el decreto nada dice sobre ello, ni mucho menos efectúa indicación alguna al cese que, en tal caso, debería efectuar la UIF en las mismas (en causa CPE 1002/2016 del registro del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8). Además, existe un precedente que permite reforzar la postura del presidente de la UIF. Es el caso de la Oficina Anticorrupción, que en el año 2020 se presentó en esta propia causa a fin de desistir de la querella ya que existía una orden del titular del organismo de dejar de intervenir en esa calidad en los procesos penales pendientes. De modo que, este antecedente, revela con claridad que cuando el organismo pretende abandonar la querella en causas en trámite, lo dice expresamente. La interpretación que aquí se propicia resulta coincidente, según pudo conocerse, con dos resoluciones de fecha muy reciente, una del Juzgado





Cámara Federal de Casación Penal

Federal N° 2 de Santa Fe en el expediente 25993/2023 y otra del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 en el expediente 1076/2015".

Por ello, en definitiva, también se rechazó el apartamiento de la UIF desde este punto de vista.

2. Pues bien, tal como se desprende del repaso de lo obrado en el legajo, la legitimación de la UIF se ha cuestionado desde dos puntos de vista bien diferentes.

Por un lado, básicamente, las defensas han alegado que el mencionado organismo nunca fue tenido por parte en estas actuaciones, y que su constitución en dicho rol ordenada en la causa 9608/18 no importa el traspaso automático de esa calidad a otras causas; desde este punto de vista, según los recurrentes, y amén de las críticas desarrolladas sobre el modo de proceder del juez instructor interviniente, no sería válido todo lo actuado por la UIF en estas condiciones.

Por otra parte, hicieron alusión al decreto 274/2025 del Poder Ejecutivo Nacional que derogó la potestad del organismo para constituirse en parte querellante.

Ahora bien, respecto de lo primero, advierto que los recurrentes no han logrado refutar -más allá de su disenso- los argumentos por los cuales el tribunal de grado rechazó el planteo de falta de acción, lo que sella la suerte del agravio deducido en tal sentido.



Es que sin perjuicio de la crítica a la forma y derrotero procesal del trámite impreso por el entonces juez de instrucción a las causas invocadas, lo cierto es que la asunción y la actuación de la UIF como querellante en este legajo ha quedado debidamente explicada por el *a quo*, sin que las partes hayan logrado confutar suficientemente esa conclusión.

Ello así, habida cuenta que, tal como lo expusiera el tribunal de grado, dicha repartición fue tenida por parte en el sumario principal nro. 9608/18, de lo que cabía deducir que también ostentaba esa calidad en estas actuaciones que son un desprendimiento de aquella. Incluso, adviértase que actuó en ese carácter a lo largo de todo el trámite del proceso, sin que se objetara ese proceder ni se demuestre cuál es el perjuicio concreto que su intervención ha producido para el derecho de defensa de los quejosos; extremo este último que descarta también cualquier pretensión de anular los actos cumplidos por el organismo.

Ahora bien, con relación al segundo agravio, esto es, la falta de legitimación de la UIF producida a partir de la modificación normativa recientemente acaecida mediante el dictado del decreto 274/2025, corresponde recordar, en primer lugar, que efectivamente el 16 de abril del corriente año, el Poder Ejecutivo Nacional emitió la referida norma por la cual, en lo que aquí concierne, de manera textual, a través de su artículo 10 derogó el decreto 2226 del 23 de diciembre de 2008 que autorizaba "*(...) a la titular de la Unidad de Información Financiera a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la*





Cámara Federal de Casación Penal

comisión de los delitos tipificados por la ley N° 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten".

Es de interés remarcar que en lo que hace a la derogación de la norma que facultaba a la UIF a querellar, el mentado decreto 274/2025 brindó los fundamentos por los cuales se desaconsejaba que el organismo ejerza ese tipo de rol, decisión que incluso se acopla a las recomendaciones que sobre el particular se habían formulado en el ámbito internacional.

En efecto, puede leerse en los considerandos de la norma que "...en la Acción prioritaria d) ´ expuesta en el Informe de Evaluación Mutua y en la Acción recomendada e) ´ para el Resultado Inmediato 6 del Informe de Evaluación Mutua, el GAFI indicó que nuestro país debe reconsiderar la intervención de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa. Que en el ámbito de las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) de la REPÚBLICA ARGENTINA es un caso aislado respecto a la facultad de querellar prevista en el Decreto N° 2226/08. Que en nuestro país, y de acuerdo al artículo 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, es el encargado de promover la actuación de la justicia en



defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Que, por otro lado, en el artículo 19 de la Ley N° 25.246 se establece que cuando la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) haya agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ello será comunicado al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal. Que ello se suma a la competencia de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) para poner a disposición del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y para el ejercicio de las acciones pertinentes los elementos de convicción obtenidos en el marco de su actuación, como así también para colaborar con los órganos judiciales y ese Ministerio Público en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente. Que el esquema actual superpone la actividad de ambos organismos con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar. Que a los fines de dotar al funcionamiento de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) de una mayor autonomía, eficacia y eficiencia, en pos de evitar una 'Influencia o Interferencia Indebida' en los términos de las recomendaciones del GAFI, y en virtud de las normas constitucionales y legales que





Cámara Federal de Casación Penal

regulan los diferentes roles y la actuación de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, corresponde derogar el Decreto N° 2226/08."

Adviértase en este punto que la derogación de la facultad de querellar de la Unidad de Información Financiera -UIF- se fundamentó en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, particularmente teniendo en cuenta que en el derecho comparado y otros países del mundo estos organismos (las UIF) no ejercen ese tipo de rol, como así también para evitar la superposición de funciones con las del Ministerio Público Fiscal (art. 120 de la Constitución Nacional), encargado éste último de ejercer la acción penal pública; amén de optimizar, claro está, los recursos económicos, humanos y la eficiencia en el ámbito del Estado.

Como se aprecia de lo expuesto, entonces, queda claro que el Poder Ejecutivo de la Nación, al derogar el Decreto N° 2226 del 23 de diciembre de 2008, mediante el art. 10 del Decreto 274/2025, revocó expresamente, por los motivos *ut supra* consignados, la autorización que ostentaba la Unidad de Información Financiera para intervenir como parte querellante en procesos penales, decisión que rige desde el día de su publicación en el boletín oficial, esto es, el 16 de abril de 2025 (conf. Art. 11 del citado decreto 274/2025).



Por lo demás, no puede dejar de repararse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en recientes pronunciamientos de una misma causa y frente a dos pretensiones análogas del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera, únicamente declaró procedente el recurso extraordinario deducido por el titular de la acción penal pública, considerando inoficioso expedirse sobre la impugnación de la referida repartición del PEN (cfr. CFP 3878/2013/4/1/CS1 "Pochetti, Carolina s/legajo de casación" del 28/10/2025).

En tales condiciones, cabe atender al planteo formulado por las defensas, en cuanto a la imposibilidad de que el mencionado organismo continúe ejerciendo el rol de parte querellante en estas actuaciones, por carecer en la actualidad de facultades legales a tal fin; todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos (conf. en lo pertinente y aplicable doctrina de la CSJN *in re* Fallos: 319: 2151 -Barry- y sus citas; 328: 566 -Itzcovich- y 330: 2361 -Rosza-; 336:1172 -De Martino-; y 338:1216 -Uriarte-).

En definitiva, propongo al Acuerdo: **HACER LUGAR** a los recursos de casación interpuestos por la defensa oficial de María Jesus Plo y Federico Zupicich y por la defensa particular de Miguel Angel Plo -y las adhesiones pertinentes-, **CASAR** la resolución recurrida, y **APARTAR** a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante en este proceso -sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos-, devolviendo las actuaciones al tribunal de grado, con los alcances indicados. Sin costas en la instancia (arts. 530 y cctes del CPPN).





Cámara Federal de Casación Penal

El señor juez **doctor Carlos A. Mahiques** dijo:

Las defensas cuestionaron la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 7 por cuanto rechazó el planteo de excepción de falta de acción, por ausencia de legitimidad procesal de la Unidad de Información Financiera.

Por una parte, los recurrentes criticaron que la UIF haya actuado como parte querellante en esta causa. Sostuvieron que no se constituyó en tal carácter durante la instrucción sino que dicho rol se hizo extensivo a partir de su actuación en el expediente 9608/2018. En razón de ello, solicitaron la nulidad de todos los actos procesales cumplidos durante el proceso, en razón de la actividad impulsada por esa parte.

Comparto en este punto, los argumentos articulados por el colega que me precede, doctor Mariano H. Borinsky, correspondiendo rechazar el planteo. No puede soslayarse en el análisis de la cuestión, que esta causa fue unificada por identidad de objeto procesal con el expediente n° 3867/2016, en el que oportunamente la UIF se constituyó y fue tenida como parte querellante por el juez interviniente.

Además, teniendo en consideración la etapa procesal en que se encuentran las presentes actuaciones, el principio de preclusión impide que se retrograden etapas de un proceso así como que se rehabiliten



facultades después de vencidos los límites legales para su ejercicio. La regla enunciada responde a la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal y está relacionada con los términos y con el avance de los estadios procesales.

Por otra parte, en cuanto al agravio vinculado con la imposibilidad de actuar de la UIF a partir de la entrada en vigencia del Decreto 274/2025, en coincidencia con lo expresado por el colega que me precede, entiendo que debe tener favorable acogida.

Al respecto tuve oportunidad de pronunciarme en el precedente *Sosa, María Soledad y otro s/recurso de casación* (cfr. causa n° FSM 34505/2018/T01/75/CFC4 de la Sala I, registro n° 599/25), en el a que sostuve que el Poder Ejecutivo de la Nación, al derogar el Decreto N° 2226 del 23 de diciembre de 2008, mediante el art. 10 del Decreto 274/2025 del 16 de abril de 2025, revocó la autorización que le había extendido a la titular de la Unidad de Información Financiera, o a los funcionarios a quienes se les encomiende ese cometido, a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la ley N° 25.246 y modificatorias, en aquellos casos en que la gravedad de los hechos bajo investigación así lo amerite.

En su art. 11, el Decreto referido estableció que “[l]a presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el *BOLETÍN OFICIAL*”, que fue el 16 de abril del corriente. En razón de esa norma, corresponde interpretar que desde la fecha indicada precedentemente, la Unidad de Información Financiera carece de facultades





Cámara Federal de Casación Penal

para querellar en procesos como el presente, por lo que cabe atender a la presentación realizada por las defensas. Es que la modificación establecida por el decreto citado, que impide que esa agencia se constituya como parte querellante, al ser de raigambre estrictamente procesal, resulta aplicable *ope legis*, es decir, de pleno derecho desde su entrada en vigor.

En virtud de lo señalado, adhiero a la solución propuesta por el colega Borinsky.

Tal es mi voto.

El señor juez **Guillermo J. Yacobucci** dijo:

Que adhiero, en las particulares circunstancias del caso, a la solución propuesta por el colega que lidera el acuerdo, Mariano Hernán Borinsky.

Como se detalla en el voto mencionado, al tratar el agravio de los recurrentes en punto a la alegada incorporación de forma indebida como parte en las actuaciones de la UIF, entiendo que los argumentos presentados muestran una mera discrepancia con lo resuelto, ya que no logran acreditar la arbitrariedad que invocan. Desde esa perspectiva, observo que la crítica intenta desmerecer los razonamientos del *a quo*, sin argumentos idóneos para descartar sus fundamentos. En efecto, la indiscutida incorporación de la UIF como querellante en el sumario principal resulta la línea a través de la cual la decisión atacada entiende que esa



misma calidad aparece consolidada en estas actuaciones. Por tanto, lo reclamado por los recurrentes, en ese aspecto, no puede ser de recibo.

A mi modo de ver, es diferente la suerte del recurso en torno a los reclamos relacionados con la falta de legitimación de la UIF, debido al reciente dictado del decreto 274/2025 de fecha 10 de abril del corriente año.

En esa decisión autoritativa del Poder Ejecutivo Nacional se derogó el artículo 10 del decreto 2226 del 23 de diciembre de 2008, que operaba como principio legitimador de la intervención con carácter de querellante de la UIF, en procesos signados por la especificidad y experticia que determina la posible comisión de los delitos tipificados por la ley N° 25.246 y modificatorias. Criterio, por lo demás, usual en decisiones administrativas que habilitan la actuación de organismos específicos del Estado, sin perjuicio de la labor del Ministerio Público Fiscal.

Las razones argumentadas para sostener ese cambio de ponderación acerca de la función del rol de querellante de la UIF apuntaron, en lo sustancial, a lo que se entendió que resultaba desaconsejable en términos de una adecuada actividad del organismo respecto a estándares de autonomía, independencia, eficacia y eficiencia operativa exigidos por el GAFI. Incluso, se señaló en un marco de derecho comparado, que esas funciones resultaban un "caso aislado" frente a otros organismos de igual naturaleza.

Por eso se subrayó, señalando presupuestos constitucionales y legales, el rol decisivo del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos





Cámara Federal de Casación Penal

de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, evitando así la superposición de actividades con la UIF.

Ese elenco de motivos muestra, de modo indiscutible, su naturaleza sustantiva para disponer la reconfiguración operativa de la UIF que, por lo tanto, va más allá de una evaluación circunstancial, episódica o como programación futura. La expresa revocación del rol de querellante, a través del Decreto 274/2025, en los términos ya apuntados, exterioriza una modificación que debe ser atendida en su terminante resignificación jurídica. En esa línea, vale recordar que la primera fuente de interpretación legal es la letra de la norma, pues ésta es el punto de partida para alcanzar su sentido jurídico.

Como he sostenido en otros precedentes, la naturaleza de la acción penal presenta tanto una razón sustancial, por la cual el Estado reacciona frente al ilícito, cuanto otra de contornos procedimentales. Aspecto que, por lo demás, es asumido por la misma constitución federal del Estado Argentino, en punto a las distintas competencias que se atribuyen a la cuestión en los códigos procesales respecto de aquellas que se integran en el Código Penal. Esta circunstancia fue reconocida inveteradamente por la Corte Suprema de



Justicia de la Nación y recientemente recordada en el precedente CSJ 2646/2015/CS1, "Price, Brian Alan y otros s/ homicidio simple", rta. el 12/8/2021.

Desde esos presupuestos normativos, entiendo que la decisión adoptada a través del decreto 274/2025 que deroga la posibilidad de la UIF de intervenir como querellante deja sin legitimación sustancial y procesal el ejercicio de ese rol en las presentes actuaciones.

En definitiva, por esos motivos entiendo que se impone la solución propiciada por el colega que lidera el acuerdo.

Así voto.

En mérito del resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal **RESUELVE**:

HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por la defensa oficial de María Jesus Plo y Federico Zupicich y por la defensa particular de Miguel Angel Plo -y las adhesiones pertinentes-, **CASAR** la resolución recurrida, y **APARTAR** a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante en este proceso -sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos-, devolviendo las actuaciones al tribunal de grado, con los alcances indicados. Sin costas en la instancia (arts. 530 y cctes del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

